



## SIMPLE Y CLARO



POR ELLIOT  
VELHER

# RETOS DEL SISTEMA DE JUSTICIA MEXICANO EN 2025: UNA PERSPECTIVA CIUDADANA

El año 2025 presenta desafíos trascendentales para el sistema de justicia mexicano, marcados por tres grandes frentes: las reformas al Poder Judicial, los debates sobre la prisión preventiva oficiosa y la entrada en vigor de la nueva reforma fiscal. Estas transformaciones no solo pondrán a prueba la capacidad de las instituciones, sino que también tendrán un impacto profundo en la vida de los ciudadanos. Analicemos cómo.

### REFORMAS AL PODER JUDICIAL: LA INDEPENDENCIA EN JAQUE

Las reformas propuestas al Poder Judicial buscan, según el discurso oficial, mejorar la eficiencia y transparencia del sistema. Sin embargo, muchas voces advierten que podrían estar diseñadas para centralizar el poder y limitar la independencia de jueces y magistrados. Esto es preocupante, ya que la autonomía judicial es un pilar del estado de derecho.

Un Poder Judicial más vulnerable a presiones políticas puede traducirse en fallos menos justos, especialmente en casos de alto perfil donde están en juego intereses del gobierno o de grandes corporaciones. Para el ciudadano promedio, esto podría significar un sistema menos accesible y confiable, erosionando la confianza en la justicia como mecanismo de protección de derechos.

*La prisión preventiva oficiosa ha sido un tema de gran controversia. Actualmente, esta medida obliga a mantener a los acusados de ciertos delitos privados de su libertad mientras se resuelve su proceso, sin importar su presunción de inocencia. La Suprema Corte discutirá en 2025 si se deben eliminar o limitar los delitos incluidos en esta figura*

### PRISIÓN PREVENTIVA OFICIOSA: JUSTICIA O CASTIGO ANTICIPADO

La prisión preventiva oficiosa ha sido un tema de gran controversia. Actualmente, esta medida obliga a mantener a los acusados de ciertos delitos privados de su libertad mientras se resuelve su proceso, sin importar su presunción de inocencia. La Suprema Corte discutirá en 2025 si se deben eliminar o limitar los delitos incluidos en esta figura.

Mientras el gobierno sostiene que esta medida es clave para combatir la impunidad, organizaciones nacionales e internacionales han señalado



que contribuye a la sobrepoblación carcelaria y a la violación de derechos humanos. Para los ciudadanos, especialmente aquellos en situación de vulnerabilidad, la prisión preventiva oficiosa representa el riesgo de ser encarcelados injustamente por errores del sistema, afectando su vida laboral, familiar y social.

De mantenerse el esquema actual, continuaremos viendo casos de personas inocentes detenidas por años, mientras que el verdadero problema, la ineficacia en las investigaciones ministeriales, permanece intacto. Si el debate resulta en cambios, se abriría la puerta a un sistema que privilegie las medidas cautelares más allá de la prisión, como el uso de brazaletes electrónicos o el monitoreo judicial.

### REFORMA FISCAL: LEGALIDAD Y BOLSILLO CIUDADANO

La reforma fiscal que entrará en vigor en 2025 promete incrementar la recaudación mediante la ampliación de la base tributaria, fiscalización más estricta y sanciones severas para los incumplidos. En teoría, esto busca combatir la evasión y elusión fiscal, pero en la práctica podría golpear a los contribuyentes pequeños y medianos.

Para los ciudadanos, esto implica un sistema más riguroso en el control de sus ingresos y gastos. La informalidad, que representa una gran parte de la economía mexicana, se verá especialmente afectada, ya que muchas personas podrían enfrentarse a procesos legales por desconocimiento de las nuevas normativas. Además, el aumento de sanciones podría derivar en abusos por parte de las autoridades fiscales, como ya se ha observado en el pasado.

Este panorama no solo plantea retos económicos, sino también jurídicos. El acceso a una defensa adecuada frente a actos de fiscalización será crucial, pero la saturación del sistema de justicia podría hacer que los procesos se vuelvan lentos y costosos.

### EL CIUDADANO AL CENTRO DEL DEBATE

Estas tres reformas tienen un denominador común: su impacto directo en la ciudadanía. Un Poder Judicial menos independiente, la permanencia de la prisión preventiva oficiosa y una reforma fiscal punitiva pueden configurar un escenario de incertidumbre legal para millones de mexicanos.

El reto para 2025 será, por un lado, garantizar que estos cambios se implementen respetando los derechos humanos y fortaleciendo las instituciones, y por otro, que los ciudadanos estén informados y preparados para afrontar este nuevo entorno jurídico. La justicia debe ser una herramienta de protección, no un arma de control.

Queda en nuestras manos como sociedad exigir transparencia, acceso y rendición de cuentas para que las reformas no se conviertan en un obstáculo, sino en un verdadero avance hacia un sistema de justicia más equitativo y funcional.



Foto: Cuartoscuro